

Conmemoración: a treinta años del 11 de septiembre de Salvador Allende

Ricardo A. Yoceluzky R.

Resumen

A tres décadas del golpe de Estado que terminó con el gobierno y la vida de Salvador Allende, la evolución política de Chile es examinada a la luz de los cambios ocurridos en el mundo y de cómo el caso chileno fue utilizado como ejemplo. Los treinta años se dividen en periodos casi iguales de dictadura y democracia, en los que la elite política profesional, formada en su mayoría antes de 1973, adopta como interpretación de la historia su propia historia y un proyecto nacional definido por los intelectuales de la dictadura (en su mayoría tecnócratas economistas). Este rasgo caracteriza a la política chilena actual, la redemocratización posdictadura, un proceso escasamente diferente de los procesos democráticos del resto de América Latina. Una democracia que resulta desilusionante para amplios sectores de la población, en especial de los jóvenes, por no tener otro contenido económico y social que no sea el plegarse a las exigencias del nuevo mundo unipolar globalizado. A pesar de mostrar ciertos elementos (seleccionados de entre los más grotescos) de la evolución ideológica de algunos políticos latinoamericanos y chilenos de la izquierda adaptada a las nuevas condiciones, el propósito de este artículo no es de denuncia sino de exploración de los mecanismos ideológicos de dominación del gremio político que hacen resultar tan frustrantes los procesos democratizadores actuales.

Abstract

Three decades after the coup d'état that ended Allende's life and his government, Chile's political evolution is examined within the world developments and changes. Democratic and dictatorship governments make up the thirty years. Political groups adopt a historical project (its own history) and a national project defined by a technocratic academic elite. This is Chile's political characterization, the post dictatorship re-democratization, slightly different process from the other ones in Latin America. This form of democracy has disappointed the majority in the country, especially recent generations, who have felt the effects of a one-country-led economic globalization. Besides showing some elements of the ideological evolution in Latin America, this paper exposes the mechanisms by which political cadres hinder the democratic process.

El campo de los cambios

La intención de este artículo es conmemorar un hecho. Esto de ninguna manera significa celebrar el hecho en referencia. Conmemorar es recordar hablando de aquello que se tiene en la memoria. Obviamente no se trata de la memoria ni de los recuerdos personales, aunque la condición de testigo presencial de alguna circunstancia sea invocada, y a pesar de que el hecho mismo haya significado un quiebre definitivo a partir del cual la vida individual se haya transformado de manera imprevisible. Se trata de recordar como un intento de comprensión y de hablar de ese recuerdo con la intención de transmitir cierta conciencia que se enraiza en la forma de esa comprensión.

Los treinta años transcurridos desde el 11 de septiembre de 1973 han visto surgir un mundo diferente. No es posible referirse a Chile y a las diferencias observables entre entonces y ahora sin enmarcarlas en los cambios más generales, y sin tratar de explicar el papel que Chile jugó en ellos y las consecuencias que se materializaron en el país. Esta idea se puede sintetizar diciendo que en 1973 el socialismo estaba en el futuro y hoy es parte del pasado; al menos una forma de entender y practicar el socialismo.

Esta primera constatación sirve para hacer presente la necesidad de tomar distancia desde el punto de vista del conocimiento, además de la distancia en el tiempo, que por obvia puede parecer suficiente para garantizar la objetividad de los juicios que se emiten. Dos campos estrechamente relacionados, pero distinguibles por necesidad, deben ser considerados en esta evaluación previa: el del pensamiento vigente y dominante entre los científicos sociales, y el de las expresiones ideológicas de los cuadros políticos dirigentes, es decir la elite política de entonces y ahora (aun cuando algunos de estos últimos pertenezcan también profesionalmente al primer grupo). Esto es, partimos de un examen de la situación de fuerzas en el campo ideológico.

Un punto de comparación que puede servir para buscar definiciones empíricas de esta situación es el de los republicanos españoles en 1969, treinta años después de su derrota. Para algunos de ellos, el mundo que surgió de la Segunda Guerra Mundial era una concreción de la situación de fuerzas mundiales que había definido el destino de España —como para los chilenos hoy; para otros había una lucha todavía en curso, en un mundo bipolar, en el cual sus ideales y programas aún tenían sentido. Para los chilenos, el ejercicio de rescate de lo que hoy puede ser válido de aquello que estuvo en juego en 1973 requiere una redefinición en un contexto absolutamente diferente.

En el caso de Chile, las tres décadas se dividen en dos periodos que ya alcanzan casi igual duración: primero 16 años de dictadura, y después 13 de la nueva democracia. Sin embargo, hay que decir, desde el principio, que ambos periodos llevan una huella más profunda de dictadura que de cualquier democracia, sea la anterior a 1973 o la reconstruida a partir de 1990. Es decir, el Chile de hoy es la construcción hecha por la dictadura. Las cuestiones pendientes, que surgen una y otra vez y que el gobierno trata de parchar buscando una solución que resulte en alguna suerte de unidad nacional que borre los agravios, los rencores, los resentimientos y las demandas de justicia, incluyendo la reparación de los daños cuando sea posible, no parecen encontrar una fórmula satisfactoria para las partes.

La idea de que hay simplemente errores que deben ser reconocidos es infantil. La realidad es que hay vencedores y vencidos, y el país es la hechura de los vencedores. El problema es que esta realidad no parece presentable para ningún político que aspire a ser apoyado por mayorías formadas por quienes no vivieron el periodo, que no conocen otra realidad nacional que la resultante del proceso de institucionalización desarrollado por la dictadura, negociado en algunos detalles por sus sucesores democráticos, y cuando en el mundo no hay alternativa al

modelo de sociedad imperante. Por lo tanto, el juego político ideológico es reemplazado por el juego electoral en el que los actores sociales sólo son invocados pero jamás convocados.

La génesis de la situación actual

Es importante definir el hecho mismo que se conmemora y su significación. El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en Chile fue una confrontación crucial para la sociedad chilena. No se trató de un accidente político que pudo haberse evitado si alguno o algunos de los actores hubiera sido "razonable", en términos de una racionalidad que sólo puede ser sostenida por un observador ajeno. La comprensión del golpe de Estado depende de la versión que se asuma de su génesis, de la conformación de sus actores principales y de la evolución de la correlación de fuerzas hacia su desenlace.

Los análisis que adoptan la postura mencionada más arriba suponen una autonomía casi absoluta de los actores políticos; la explicación de esos mismos hechos expuesta aquí parte de la definición de la relación entre los actores políticos y sociales. Cualquier visión unilateral que separe e independice a alguno de estos dos tipos de actores incurre en una simplificación que, además, nunca es inocente ideológicamente. Por esto conviene comenzar explicitando el contenido ideológico del enfrentamiento, según algunas versiones, y las consecuencias que en ese terreno tendrán los resultados inmediatos y mediatos.

Para algunos, la independencia de la ideología es casi absoluta, por lo que pueden atribuir a ella la polarización que hizo irreconciliables las posiciones que al final se enfrentaron violentamente. Esto se expresaría, además, en una suerte de invasión foránea, puesto que esa radicalización estaría originada por la Revolución Cubana y su influencia. Para otros, se trataba pura y simplemente de un enfrentamiento de clases, en el que la organización política de las clases trabajadoras y su diseño estratégico contenía "errores" que condujeron al fracaso.

Algunas tesis establecidas (casi oficiales) que han constituido el sentido común acerca de lo que ocurrió, incluso entre algunos testigos y hasta protagonistas, son:

1) La destrucción del sistema político chileno en 1973 se debió a una polarización ideológica inducida desde el exterior, al menos parcialmente, por factores como la Revolución Cubana;

2) Eso se podría haber evitado si la Unidad Popular y la Democracia Cristiana hubieran llegado a un acuerdo;

3) Augusto Pinochet y sus allegados "abrieron" la posibilidad de un retorno a la democracia;

4) La actual composición de la alianza política que gobierna Chile expresa la maduración y el aprendizaje de las lecciones del pasado.

Las tesis alternativas que alguna vez he propuesto (Yocelvezky, 2002:13) son:

1) La polarización que se produjo en Chile estuvo determinada por la per-

meabilidad de los partidos políticos, en particular de izquierda, a las demandas de las clases sociales subordinadas. Si la radicalización ideológica exterior (generalizada en América Latina) desempeñó un papel, éste se expresó en las alternativas de radicalizarse dentro del sistema de partidos y alianzas de partidos existentes: socialistas, comunistas y asociados en la Unidad Popular, o bien en la izquierda extraparlamentaria.

2) Lo que se negociaba entre la Democracia Cristiana y el gobierno de la Unidad Popular en 1973 era la subsistencia del sistema, cuando la Democracia Cristiana ya estaba subordinada a la estrategia de destrucción de ese sistema.¹

3) La transición chilena fue el producto de un enfrentamiento en el que se redefinieron las relaciones entre las fuerzas sociales y sus representaciones políticas –los partidos políticos. Así, la amplitud del espectro ideológico y la permeabilidad de los actores políticos a las demandas sociales fueron redefinidas a través de la reconstrucción del sistema de partidos.

4) Los acuerdos y alianzas en el actual sistema de partidos, reconstruido, reflejan las relaciones de fuerzas ideológicas entre las distintas partes de la elite profesional de la política, a partir de la redefinición del proyecto nacional de desarrollo hecha por la dictadura.

Esta última tesis resume la trayectoria ideológica de la elite política profesional que se ha reciclado a sí misma para participar en un sistema diseñado de tal modo que representa la realización de los objetivos estratégicos de la dictadura. Esto no es un juicio moral sino una constatación de hecho. La explicación de la evolución ideológica de esta elite profesional de la política no constituye un enjuiciamiento de sus miembros en tanto individuos, sino un análisis del campo ideológico como un terreno de enfrentamiento. Para eliminar equívocos y poner esto en blanco y negro, hoy el dilema de un político chileno es permanecer en la corriente principal, descrita crudamente más arriba, o dejar de ser político. Nada refleja mejor esta realidad que el papel marginal, extraparlamentario, al que se ha visto reducido el Partido Comunista de Chile, luego de haber sido el principal sostén del sistema de partidos de izquierda.

Una visión esquemática del cambio en el espectro ideológico encarnado en el sistema de partidos podría quedar satisfecha con la constatación de un desplazamiento hacia la derecha, para incorporar al sistema a la derecha extraparlamentaria, que fue una fuerza impulsora del golpe de Estado, un apoyo incondicional de la dictadura y que reivindica hoy la obra de Pinochet y sus seguidores,² y por la izquierda la exclusión ya mencionada del Partido Comunista. Sin embargo, el

¹ Hasta qué punto esto era así, que quedó en evidencia en algunos de los testimonios e información de archivo que tanto los medios impresos como los canales de televisión presentaron para conmemorar las tres décadas del golpe de Estado. Por ejemplo, la no desmentida afirmación atribuida a Aylwin por un dirigente empresarial de 1973: "prefiero una dictadura parda a una dictadura roja".

² Encarnada hoy en la Unión Demócrata Independiente (UDI), pero también en parte de Renovación Nacional.

conocimiento más superficial de la historia previa a 1973 señalaría una inconsistencia en esa esquematización, puesto que el Partido Socialista de Chile aparecía más al extremo izquierdo del sistema que sus socios comunistas, recogiendo sistemáticamente las expresiones antisistema y, se podría decir, “barriendo hacia dentro” del sistema a sectores de la izquierda extraparlamentaria, especialmente, aunque no de manera exclusiva, durante los tres años del gobierno de la Unidad Popular. De modo que lo que debe explicarse es una recomposición del sistema de partidos políticos, del espectro ideológico que dice representar y, sobre todo, de los mecanismos de representación de los intereses de clases y otros sectores sociales.

Un breve repaso de las “lecciones de Chile”

El entrecomillado de las lecciones obedece a que con ese título, o bajo ese rubro, se produjeron los juicios más variados durante los tres años del gobierno de Salvador Allende, pero sobre todo después de la derrota de su proyecto y la brutal entronización de la dictadura. La imagen más difundida de lo que ocurría en Chile era la de la segunda vía al socialismo, o la vía pacífica al socialismo. Esto despertaba adhesión y rechazo tanto en la derecha (rechazo unánime) como en la izquierda, donde una parte rechazaba la metodología, ya sea por heterodoxa o por inviable, con más frecuencia una combinación de las dos argumentaciones.

Sobre el rechazo que el experimento chileno despertó en Estados Unidos de Norteamérica basta recordar tres testimonios: Kissinger, que afirmaba que no se podía ver impasiblemente a un país hacerse comunista por la irresponsabilidad de su propio pueblo; Nixon, que en una de las primeras entrevistas con que marcó su retorno a la luz pública después de su bochoso *mutis*, afirmó que su gobierno no podría haber permitido que América Latina quedara hecha un *sandwich* entre dos países comunistas (Cuba y Chile), a lo cual el entrevistador retrucó preguntando, con ironía británica, si no le parecía poco pan para el emparedado; por último, en serio (a pesar que el payaseo citado anteriormente tuvo consecuencias trágicas), el *Informe Church* del Senado estadounidense sobre las acciones encubiertas de la CIA en Chile (U. S. Senate, 1975).

En Chile, la derecha cuestionó la legitimidad del gobierno no como tal —puesto que las formas legales y constitucionales se habían cumplido rigurosamente— sino cuestionando su autoridad para llevar a cabo las transformaciones propuestas en el programa de gobierno a la luz de una mayoría sólo relativa en las elecciones de 1970. De aquí nació, muy temprano, el argumento acerca de que Allende pretendía construir el socialismo con el apoyo de sólo un tercio de la sociedad chilena.³ Al respecto hay que aclarar que nunca se trató de sólo un tercio. Es verdad que la presidencia (1970) se ganó con poco más del 36 por ciento, pero

³ La trayectoria de este argumento es por sí sola reveladora de la evolución de la confrontación ideológica en Chile. Fue expuesta por primera vez en un editorial del diario *El Mercurio*, el vocero

en las elecciones municipales de 1971 la Unidad Popular alcanzó la mitad del electorado, y en las parlamentarias de 1973 obtuvo más del 40 por ciento.

En la izquierda, la discusión se centró en el significado del programa y las características que debía asumir su aplicación. Algunas de estas discusiones se hicieron en el lenguaje tradicional de una izquierda doctrinaria que afirmaba la autoridad de su argumento más en citas que en hechos y con interpretaciones ideológicas de la historia reciente o remota. Los argumentos se mantuvieron inalterados después de la derrota, y por mucho tiempo cada quien insistió en haber tenido razón antes y después del desenlace del proceso.

Hoy puede ser útil mirar esto a la luz de los cambios que ocurrieron con posterioridad. Durante algunos años la experiencia chilena estuvo en la mira de la izquierda internacional, especialmente cuando ésta buscaba una alternativa que la hiciera más presentable en los sistemas democráticos occidentales y trataba de dissociarse de la Unión Soviética como modelo único de éxito y triunfo de las ideas socialistas. Chile era un nombre familiar para algunos eurocomunistas. Especialmente, se argumentaba, Chile probaba la posibilidad de triunfo por la vía electoral. Lo que no se discutía era de qué socialismo se podría haber tratado el proceso chileno.

Todo esto contribuyó a mantener la atención sobre lo que ocurría en Chile bajo la dictadura, y permitió el impresionante movimiento de solidaridad con los exiliados chilenos tanto por parte de los comunistas como de la izquierda democrática en Europa y, en general, en todo el mundo. Los exiliados contribuyeron a las discusiones con sus versiones del proceso chileno hasta que la misma vida política fuera de contexto que caracteriza al exilio, los acontecimientos en Chile y el desgaste y posterior derrumbe del socialismo soviético transformaron completamente la escena y los actores sufrieron mutaciones ideológicas que los dejaron, en algunos casos, irreconocibles. Sin embargo, el ritmo de estas transformaciones ideológicas que se expresaban y justificaban en términos de la evolución del pensamiento "universal", por designar el ámbito más amplio posible, estaba asociado a los procesos políticos que dentro de Chile iban marcando el desgaste de la dictadura y la recomposición de la política en vistas a su reemplazo por un sistema democrático.

Los años setentas y ochentas presenciaron la constitución, imposición y legitimación a través de la institucionalización, de un orden nuevo. Los elementos o campos de enfrentamiento en los que este proceso se expresó fueron los de la violencia, la política y la ideología.

Dentro de Chile y en la oposición a la dictadura, el proceso definitorio fue la subordinación de la izquierda a la Democracia Cristiana, que de apoyar el golpe de Estado había sido desplazada a la oposición por la misma dictadura. En los años ochentas, la derrota ideológica de la izquierda chilena estuvo marcada, pri-

tradicional de la derecha, el 23 de septiembre de 1970, y retomado casi inmediatamente por Jaime Castillo Velasco, en entrevista al mismo diario, el 27 de septiembre de ese año.

mero, por la aceptación de la versión de la historia de los vencedores (la tesis del tercio), y después, por la aceptación de la Constitución de Pinochet y los términos que ésta definió para la transición. Esto último fue la obra de la Democracia Cristiana que desmovilizó a la protesta social en función de la meta realista de derrotar a la dictadura en el plebiscito de 1988. Así apareció la versión definitiva (hasta nueva orden) de las lecciones de Chile: el "error" de Allende fue querer llevar al país al socialismo con el apoyo de sólo un tercio de la sociedad y, lo nuevo, la Constitución de 1980, ilegítima en su origen y su imposición, es un marco de acción que hace posible la vida democrática (con reformas menores).

Hoy no es pecado ser revisionista

Esta historia tan escuetamente resumida casi hasta la caricatura, merece una reconsideración en algunos de los términos principales que han jugado en el enfrentamiento ideológico. Un componente fundamental de ellos, que ha conformado un campo de confrontación que debe ser parte al menos de nuestro objeto en esta discusión, porque proveyó las municiones en momentos cruciales de los cambios señalados, son las teorías propuestas en las ciencias sociales latinoamericanas que en todo momento fueron, o bien escenificadas en Chile, o contaron con algunos chilenos entre sus protagonistas, y en todos los casos usadas en las discusiones políticas.

La ideología dominante entre los científicos sociales en la época en que tuvo lugar el gobierno de Allende, era alguna versión de ese complejo ideológico que se denominó (en plural) "teorías de la dependencia", con su característica mezcla de desarrollismo, populismo, marxismo y nacionalismo tercermundista en su versión política, pero que representaba un intento de comprensión multidisciplinaria, histórica y compleja, en sus diferentes versiones intelectuales y académicas.

Un dato importante es que la ideología dominante, en el sentido más amplio, desde la segunda posguerra hasta la década perdida en América Latina, fue el desarrollo nacional. Éste era un objetivo incuestionable que cubría el horizonte de todas las tendencias políticas: derecha, centro e izquierda. Las diferencias podían tener que ver con los medios, no con los fines. Esto fue decisivo para la transformación de la ideología socialista en ideología de la revolución nacional. El socialismo, como idea, para las elites dirigentes, especialmente para las juventudes universitarias que formaron el grueso de las dirigencias de las guerrillas en casi todos los países de América Latina después de la Revolución Cubana, era más una vía de superación del subdesarrollo que una utopía de reorganización de la sociedad. Esto tuvo muchas consecuencias que no es el caso explicitar aquí, pero fundamentalmente dos: primero el no preocuparse por el problema de la democracia hasta después de instauradas las dictaduras de los años setentas, y segundo, el desembarazarse de la carga ideológica del marxismo, en particular, y de todo el pensamiento socialista, en general, después del derrumbe soviético, y asumir unas aspiraciones a la dirección nacional de los países sin mayor elaboración de un proyecto de sociedad, o bien, dando a esta tarea un

papel subordinado frente a su propia participación política en el sistema tal como es. Esta última actitud es la que con más frecuencia se critica desde el punto de vista moral.

En el caso chileno, el programa de gobierno de la Unidad Popular era ambas cosas: un plan de desarrollo económico, que llevaba hasta sus últimas consecuencias la idea de un desarrollo hacia dentro, y una vaga promesa de iniciar un tránsito hacia una sociedad distinta. Hay que recordar que el socialismo es mencionado sólo dos veces en ese programa. De ahí surgieron las ambigüedades que dieron lugar a las interpretaciones contradictorias y a las acciones descoordinadas que plagaron los tres años: el gobierno, Allende, una parte de sus funcionarios y el Partido Comunista estaban comprometidos con el programa de desarrollo económico, y la movilización social y política que empujaba más allá de las metas establecidas era vista como una acción perjudicial e incluso contraria a la acción transformadora del gobierno. Otra posición, representada por algunos funcionarios, la mayor parte del Partido Socialista y otros elementos de izquierda, veía el programa de gobierno como un instrumento transitorio que debía ser modificado a la luz de las demandas que iban surgiendo de los grados crecientes de organización y movilización, aún cuando estos últimos ocurrieran al margen del aparato institucional y frecuentemente fuera de todo control posible por parte de los partidos políticos que componían la alianza en el gobierno.

Detrás de esto estaba la radicalización de las demandas sociales que había ocurrido durante el gobierno reformista anterior, el de la Democracia Cristiana. Los socialistas chilenos, en particular, no podrían haber apoyado un programa menos radical que el de la Unidad Popular en 1970. Esa lección de la experiencia chilena quedó implícita, pero la Constitución impuesta por Pinochet se hizo cargo del problema al aislar y blindar a los partidos políticos con respecto a las demandas sociales. Los movimientos y organizaciones sociales han quedado segregados de la actividad y la organización de los partidos, por prohibición expresa en la Constitución.

Por si esta protección del sistema político con respecto a las demandas sociales fuera insuficiente, se diseñó un sistema electoral que garantiza la sobre representación de las minorías, y se aseguró que los mecanismos de reforma de la Constitución la hicieran suficientemente inflexible. Este conjunto constituye la camisa de fuerza que provee de todas las disculpas a disposición de la izquierda, que acepta administrar un sistema, alegando inocencia respecto del origen y las características más criticables del mismo. Además, la evolución ideológica del mundo provee de un sentido común que permite descalificar, como anacrónicas, cualquier crítica a sus acciones y justificaciones, para lo cual se dispone del impresionante arsenal de ideas circulantes a la moda de hoy en las ciencias sociales.

⁴ Ver, por ejemplo, dos trabajos tempranos en esta línea de James Petras (1989 y 1996).

¿Y qué hiciste del marxismo que juraste?

En los años sesentas se introdujo en las escuelas de ciencias sociales de las universidades latinoamericanas una versión (o lectura, como se decía *in illo tempore*) de la obra de Marx que se puede caracterizar como estructuralismo de origen francés, representada por la obra de Louis Althusser y divulgada profusamente por discípulos tan variados como Régis Debray, Marta Harnecker y otros. Es verdad que no se puede responsabilizar a los autores de lo que los lectores hagan con sus ideas, pero era claro en ese tiempo que las simplificaciones de esa lectura con fines de difusión favorecían la constitución o el desarrollo de una forma de dogmatismo que afectó la calidad de la investigación y la enseñanza de las ciencias sociales.

Los elementos que explican esta situación son muchos, pero algunos muy importantes no deben ser olvidados, sobre todo, que este cambio ideológico en las ciencias sociales haya ocurrido en medio de un proceso de crecimiento y masificación de la enseñanza superior, que es un fenómeno mundial, no solamente latinoamericano; y justo en el periodo inmediato de reverberación de la Revolución Cubana. Sin embargo, hay que buscar los elementos que producen el resultado descrito. La imitación del modelo cubano de revolución se redujo a las guerrillas, encabezadas por una generación de universitarios que veían su carrera política obstruida por la generación anterior de dirigentes populistas, nacionalistas y, en general, desarrollistas, que ocupaban los mandos de los partidos y los gobiernos latinoamericanos. Para estos jóvenes había una urgencia de la práctica política que llevaba a descalificar la elaboración académica de las ideas, por lo cual un catecismo ideológico (marxista o no) satisfacía sus necesidades instrumentales. Lo que todo esto significó para las ciencias sociales no es el objeto aquí. Lo que importa es la evolución de esta elite de jóvenes universitarios con vocación por el ejercicio del poder.

Es verdad que la política de esos años tenía un tono épico, y nadie podría acusar de cobardes a los líderes de aquellas generaciones. Lo que se busca aquí es destacar el carácter sociológico del fenómeno, que disminuye considerablemente la importancia de las justificaciones ideológicas de entonces. Para esto es importante ver hoy el destino de algunos destacados miembros de esas generaciones y su posición acerca de su pensamiento de entonces.

Con respecto al marxismo, hoy se puede abjurar de él o pretender que en él mismo se puede encontrar justificación para el curso de la acción asumido recientemente. Como ilustración de esto se puede citar a Teodoro Petkoff, un venezolano de esa generación, no sólo guerrillero, sino protagonista de episodios espectaculares como una fuga de prisión. Entrevistado como Ministro del Plan Económico del gobierno de Rafael Caldera, justifica las privatizaciones en su país como una forma de liberar al desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad del obstáculo que representaban las relaciones de producción de la propiedad estatal. Esta es su lectura de la *Crítica de la economía política* y del primer tomo de *El capital* de Marx (Curiel, 1997). En el caso de un chileno, Enrique

Correa, reingresado clandestinamente al país en la década de los ochentas, protagonista de la transición de la dictadura de Pinochet al gobierno de Patricio Aylwin, ministro de este último y hoy transformado de operador político en consultor y "lobbyista" de intereses privados, explica su transformación por haber hecho una lectura equivocada de Marx: "el capital es un libro a favor del dinero y la riqueza" (Enríquez-Ominami, 2003).

No se trata de evaluar las posibles lecturas del marxismo. Se trata de constatar que para la sociología la explicación del sentido de la acción se encuentra en una atribución que debe ser justificada por el observador y no por lo que el actor diga de sus motivaciones. Así también, la explicación de la conducta de estas elites latinoamericanas está en su búsqueda del poder y no en sus declaraciones ideológicas.

La democratización

El análisis del proceso de democratización chilena o de cualquier otro caso en América Latina presenta un problema simétrico al de la década de los sesentas: la ideología dominante hoy en las ciencias sociales es el liberalismo económico, que exporta sus modelos a las otras ciencias sociales. La crítica no tiene cabida porque los conceptos que usa no pertenecen a las escuelas de moda. Los académicos que sienten el escozor de la urgencia por la acción tienen otras posibilidades que no son las guerrillas; hoy se puede ser consultor, al servicio del Estado o de alguna empresa.

El mercado de trabajo, las posibilidades y formas de inserción, influyen tanto en la definición de los temas de investigación como en las formas de abordarlos. Esto no es nuevo, por el contrario, el funcionamiento de las determinaciones estructurales es igual a la situación descrita para los años sesentas. La diferencia está en el marco ideológico que define el vocabulario y los contenidos teóricos de la práctica de las ciencias sociales, por un lado, y del discurso de los políticos practicantes o aspirantes a ello (entre los cuales, al igual que en los sesentas, se cuenta un buen número de estudiantes, académicos y profesionistas del campo de las ciencias sociales), por el otro.

La diferencia fundamental entre la situación de hace tres décadas y la de hoy está en la relación que se establece entre las demandas de la sociedad y la acción de los políticos, como corporación. El caso chileno ha sido particularmente exitoso en mantener esta separación por varios medios que actúan en diferentes niveles. En primer lugar actúa el blindaje institucional, mencionado más arriba, diseñado ex profeso para impedir la repetición de la experiencia de la Unidad Popular de 1970 a 1973. La prohibición a los partidos políticos para "intervenir en actividades ajenas a las que les son propias" y de la participación política-partidista de las organizaciones sindicales y sus dirigentes, establecida en el artículo 19 de la Constitución de 1980, es la concreción de las instrucciones de Pinochet a Enrique Ortúzar, presidente de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, el 10 de noviembre de 1977, en un oficio en el que el punto *n* expresaba:

... hay que impedir la intromisión de los futuros parlamentarios o grupos políticos en la generación o funcionamiento de las entidades gremiales o sindicales, estudiantiles, profesionales y vecinales, incluidos especialmente los conflictos laborales o estudiantiles. Las sanciones a quienes transgredan estas prohibiciones deben ser precisas y drásticas (...) considero fundamental estudiar normas de incompatibilidad que hagan imposible que las actividades gremiales se confundan con las políticas, o sirvan de trampolín para éstas.

La indiferencia de los administradores de la nueva democracia chilena hacia las demandas de la sociedad ha rayado en el desprecio. Al informe Rettig, promovido por el primer gobierno de la concertación (Aylwin), le siguió la fórmula "justicia en la medida de lo posible" (que con el tiempo suena a sarcasmo). El segundo (Frei), sólo aceptó entrevistarse con los familiares de los desaparecidos (las víctimas más emblemáticas de la dictadura) en el quinto año de su gobierno (de seis). Y el tercero (Lagos), al plantear su propuesta para solucionar el problema pendiente que representan los atropellos a los derechos humanos perpetrados por la dictadura, produce como primera reacción una huelga de hambre por parte de tres hijos de ejecutados políticos.

Al mismo tiempo, es importante la forma de blanquear a las Fuerzas Armadas de su responsabilidad en todos los atropellos perpetrados durante la dictadura, al separar la responsabilidad institucional de la individual (Chile todavía no tiene un general Balza). Por otra parte, está la resurrección de la imagen de las Fuerzas Armadas como prescindentes e institucionales (a pesar del papel que les confiere la Constitución), y el estereotipo cursi de referirse respetuosamente a "las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas" como instituciones educativas.⁵ Por si faltaran demostraciones de que la historia enseña nada, un representante de la juventud del Partido Comunista apareció en la televisión defendiendo la idea de extender el sistema de financiamiento a los estudiantes de educación superior, a los alumnos de las escuelas militares.

Sobre el sistema universitario y los medios de comunicación, la conclusión de una investigación realizada por un periodista es lapidaria:

El hecho de que el periodismo a finales de la dictadura fuera más pluralista y tal vez más adecuado para la época democrática que el periodismo actual, indica que los periodistas tienen el talento y el coraje suficientes para jugar un papel importante en la promoción de la democracia. Hasta con la derogación de las leyes de desacato, los propietarios de medios y los políticos evitan que la prensa actúe como un Cuarto Poder que abogue por el bien de la ciudadanía (Dermota, 2003:422).

⁵ Esta frase ritual fue repetida tres veces (por lo menos) en la conmemoración de los 190 años de la fundación del Instituto Nacional, en el Teatro Municipal de Santiago, el 10 de agosto de 2003. La usaron el locutor oficial, el vice-rector del colegio y el ministro de educación, para saludar, en particular, la asistencia de los ex alumnos integrados a esas escuelas.

La defensa de Pinochet que asumió el gobierno de Chile, a raíz de la detención del dictador en Londres, va más allá de la responsabilidad como Estado que defiende su soberanía. Quizás las declaraciones de Aylwin al desmentir su apoyo a la candidatura del juez Garzón al premio Nobel de la Paz, sus comentarios descalificatorios de este jurista español, expresen mejor que nada el profundo resentimiento que su actuación produjo en el gremio político chileno. La incapacidad de este último frente a los militares como poder fáctico queda demostrada cada vez que no puede evitar que la sociedad, como masa, se exprese exigiendo "juicio a Pinochet" (como en la celebración del triunfo de Lagos en la segunda vuelta de la elección presidencial de 2000).

Los indicadores del divorcio entre políticos y sociedad en la nueva democracia chilena se pueden multiplicar. En 2003 tuvo lugar el primer intento de paro nacional desde el fin de la dictadura por parte de la central sindical. La reacción oficial fue doble: por un lado restar representatividad a la organización que convocó al paro y efectividad a la convocatoria y, por otro, lamentar que los actos de violencia que ocurrieron fueran a ser transmitidos al exterior, dañando la imagen del país.

Los partidos viven hoy de y para el mercado electoral. En éste, los socialistas y el Partido por la Democracia nunca han dejado de invocar el espectro de Allende y de la izquierda chilena que él encabezó. Todavía les rinde dividendos electorales. Sin embargo, en un sistema en que la abstención es favorecida por el ordenamiento legal, ya que la inscripción en los registros electorales no es obligatoria, y por la cultura predominante entre los jóvenes, para quienes no reviste mayor interés la política, pues no tiene nada que ofrecerles, los discursos electorales son tan vacíos como anacrónicos, lo cual no quiere decir que los partidos no tengan programas. La conservación sin cambios del sistema es la prioridad.

Esta vez Chile no es una excepción

El proceso de democratización chileno, con su separación de la política respecto de la sociedad, es característico de la ola democratizadora latinoamericana. Después de las dictaduras, en los años ochentas, los países latinoamericanos reconstruyeron sus sistemas políticos, en muchos casos con nuevas constituciones, y en la mayoría con nuevas organizaciones políticas. No hay que equivocarse las dimensiones de comparación. Hoy lo común es la separación de la política de las demandas de la sociedad. Cada país ha hecho esto a partir de su estructura anterior, que con distintos modelos organizativos e ideológicos realizaba esta comunicación en la época del predominio del modelo desarrollista, generalmente a través de mecanismos no democráticos como las variaciones de arreglos corporativistas, populistas y caudillistas. Frente a estos antecedentes, la transición a la democracia electoral debe ser apreciada en todo su valor. Sin embargo, la imposición de un modelo de desarrollo económico excluyente a partir de la década de los ochentas ha resultado en un modelo democrático que no estimula la participación, por el contrario, se caracteriza por niveles crecientes de abstencionismo.

Las demandas de la sociedad son expresadas a través de movimientos de ocasión en las coyunturas electorales, que recuerdan a los populismos de otras épocas, pero que se deshacen en el ejercicio del poder por las restricciones impuestas a la política económica por los organismos financieros internacionales. Estos últimos han reaccionado al tomar conciencia de la responsabilidad que se les atribuye en el deterioro de las condiciones económicas de estos países. Han comenzado una campaña publicitaria con spots de televisión condenando la pobreza.

Las demandas de distintos grupos sociales a veces cuajan en una coincidencia en el tiempo (como en Argentina en 2001 y recientemente en Bolivia). Sin embargo, es importante notar que estos movimientos heterogéneos que coinciden en el tiempo no pueden superar su carácter de protesta, de oposición y, por lo tanto negativo, cuyo límite de desarrollo de fuerza parece ser el ejercer una suerte de veto a algunas medidas que, sin mecanismos regulares de procesamiento de las demandas sociales, terminan en el derrocamiento de gobiernos, que del triunfo electoral a la impopularidad parecen haber gastado su capital político en tiempos sorprendentemente cortos.

Chile tiene una democracia electoral que ha institucionalizado un mecanismo de abstencionismo electoral. La elite gobernante, a través de los partidos de la concertación, tiene un capital político que se desgasta lentamente. Está compuesto del escarmiento representado por la dictadura a las demandas sociales apoyadas en la movilización, a lo cual se suman las evocaciones rituales de la época de la Unidad Popular, en particular la imagen de Salvador Allende y su muerte. Sin embargo, la sociedad, y en particular los jóvenes, está ausente de los proyectos políticos en ejecución.

Referencias bibliográficas

- Dermota, Ken (2002), *Chile inédito. El periodismo bajo democracia*, Santiago de Chile, Ediciones B Chile S. A.
- Petras, James (1989), "La metamorfosis de los intelectuales latinoamericanos", en *La Jornada*, México, 4 de enero, sección Perfil.
- (1996), "El posmarxismo rampante. Una crítica a los intelectuales y a las ONGs", en *Excélsior*, México, 26 de noviembre, sección Ideas.
- U. S. Senate (1975), *Covert Action in Chile 1963-1973*, Washington D.C., Washington, U. S. Government Printing Office, Select Committee to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities. Staff report.
- Yoclevzky, Ricardo y A. Ricardo (2002), *Chile: partidos políticos, democracia y dictadura 1970-1990*, Santiago de Chile, Fondo de Cultura Económica.

Filmes

Curiel, Miguel (1997), *Guerrilleros al poder*, Venezuela, Cinemateca Nacional, documental.

Enríquez-Ominami, Marco (2003), *Los héroes están fatigados*, Chile/Francia, cine documental.